



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	005001-31-05-017-2022-0225-01
Demandante :	María Luz Atehortua Correa
Demandado:	Gobernación de Antioquia
Asunto:	Apelación Sentencia
Procedencia:	Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Prima de Vida Cara

Medellín, marzo seis (6) de dos mil veintidós (2022)

En fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral de Medellín, el 29 de noviembre de 2022, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora MARÍA LUZ ATEHORTUA CORREA en contra de LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Radicado 05001-31-05-017-2022-00225-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora MARÍA LUZ ATEHORTUA CORREA convocó a juicio a la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, a fin de que se condene a esta última a reajustarle el valor de la mesada pensional, incluyendo en forma completa la prima de vida cara mes a mes, desde el momento en que se suspendió su pago hasta el momento en que se profiera sentencia; se ordene la indexación del reajuste del valor de las condenas y se reconozca y paguen los intereses moratorios de conformidad con el artículo 141 de la ley 100 de 1993.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso, en síntesis, que la promotora del proceso prestó sus servicios al Departamento de Antioquia desde el 17 de Julio de 1978 al 30 de marzo de 2000, adscrita a la Secretaría de Obras Públicas; que le fue reconocida la pensión de jubilación, en cuantía mensual de \$580.876.10, a partir del 19 de mayo del 2.000, teniendo en cuenta para ello un salario de \$726.095.13, (prima de navidad: \$56.204.67, prima de vida cara: \$53.630.17, prima de vacaciones: \$64.429.75, prima de clima convencional: \$16.111.67, prima de alimentación: \$ 14.964.58)., que la Gobernación de Antioquia, mediante comunicado del 3 de marzo de 2018, le informa que *“con dineros públicos no se puede pagar la prima de vida cara porque tanto el tribunal de Antioquia como el consejo de estado ordenaron que las primas creadas por consejos o asambleas territoriales después de 1968 son ilegales y violan la constitución y la ley;* que como consecuencia su mesada pensional se ha visto reducida notablemente, afectando su mínimo vital. Se aduce que la actora tiene un derecho adquirido, dado que al momento del reconocimiento de la pensión cumplía con cada uno de los requisitos para jubilarse, que la Ordenanza No 4 (sic) de 1975 se expidió antes de la Constitución Política vigente y la Ley 100 de 1993, que era aplicable legalmente además se trata del reconocimiento de una prestación económica en forma previa al Acto Legislativo 001 de 2005.

1.2.- CONTESTACIÓN

La Gobernación de Antioquia replicó la demanda, aceptando como cierto el vínculo laboral, los extremos, el cargo, la fecha de nacimiento de la accionante y precisa que la prima de vida cara encuentra derogada, por cuanto la Asamblea Departamental de Antioquia, no tiene facultades para crear factores salariales y por lo tanto las primas creadas por dichas corporaciones son ilegales y en ese orden de ideas se suspendió su pago.

De cara a enervar las pretensiones formuló las excepciones que denominó excepción de inconstitucionalidad; la falta de competencia; nulidad de ordenanzas 034 de 1973, 033 de 1974, 31 de 1975 y 17 de 1981 y decaimiento de los actos administrativos.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Laboral de conocimiento mediante fallo proferido 29 de noviembre de 2022, absolvió a la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA de todas y cada de las pretensiones formuladas por la señora MARÍA LUZ ATEHORTUA CORREA, declaró implícitamente resueltas las excepciones formuladas por la entidad demandada y se abstuvo de condenar en costas

1.4. RECURSO DE APELACION

Demandante

Interpone el recurso de apelación contra la sentencia el cual sustenta en que en materia laboral y pensional deben respetarse, en todos los casos, los derechos adquiridos, (Sentencia C789 de 2002, C177 de 2005), aduce que, si bien, en principio, los cambios se aplican a las relaciones de trabajo independientemente si son favorables o desfavorables, ello se da siempre y cuando no hayan adquirido el derecho, porque la ley laboral no es retroactiva.

Agrega que el Código Sustantivo de Trabajo, artículo 16, señala que las normas de trabajo, por ser de orden público, tienen efectos inmediatos, se aplican a los contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en que dicha norma empiece a regir, pero no tiene efectos retroactivos no afectan situaciones consolidadas con las normas anteriores y que para el caso, teniendo en cuenta especialmente el artículo 20 de la Convención Colectiva de Trabajo del 25 de noviembre de 1965, que aprobó la prima de vida.

1.5. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión se pronunció el alzado, recabando que el artículo 20 de la Convención Colectiva de Trabajo 1965, señala expresamente que *“toda ordenanza o ley dictada que favorezca a los trabajadores, se aplicará a los trabajadores de obras públicas y agricultura con carácter convencional y por lo tanto irrenunciable”* y en dicha convención se aprobó la prima de vida cara, la cual se le reconoció a la demandante hasta el día 3 de marzo de 2018, y su suspensión no es procedente, considerando que la convención colectiva de Trabajo está por encima de todas las normas laborales, por lo que el acto de suspensión de pago, es inconstitucional y va en contravía del ordenamiento jurídico.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.2. HECHOS NO CONTROVERTIDOS

No se discuten en el proceso, los siguientes supuestos fácticos:

-Que la gestora del proceso prestó sus servicios al Departamento de Antioquia desde el 17 de Julio de 1978 al 30 de marzo de 2000, adscrita a la Secretaría de Obras Públicas en calidad de **trabajadora oficial**. (véase folios 18 del anexo 01, Carpeta Actuación Juzgado 11 Administrativo.

- Que la señora María Luz Atehortúa Correa, le fue reconocida pensión de jubilación de orden convencional por parte de la Gobernación de Antioquia, mediante Resolución 4123 del 19 de mayo de 2000, con fundamento en la cláusula duodécima de la Convención Colectiva de Trabajo del 09 de diciembre de 1970, bajo los parámetros determinados en la Convención Colectiva de Trabajo del 30 de noviembre de 1978, en cuantía de \$580.876.10, tal como se acredita con la copia de la resolución glosada a folios 18 del anexo 01, Carpeta Actuación Juzgado 11 Administrativo.

-Que la a demandante le fue suspendido por parte de la Gobernación de Antioquia el pago de la prima de vida cara como mesada adicional que se divide y cancela en los meses de febrero y agosto de cada anualidad, véase folios 20 del anexo 01, Carpeta Actuación Juzgado 11 Administrativo.

2.2. PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER

Deberá la Sala determinar:

¿Si debe revocarse la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2022 por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar acoger las súplicas de la demanda, determinando para tal fin si hay lugar a ordenar el pago a la promotora del proceso de la prima especial de vida cara, como mesada adicional, consagrada en el artículo primero de la Ordenanza 33 de 1980, así como al pago de

la indexación y los intereses moratorios regulados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.?

2.4. TESIS

El problema jurídico se resuelve bajo la tesis según la cual no hay lugar a ordenar el pago de la prima especial de vida cara, como mesada adicional consagrada en el artículo primero de la Ordenanza 33 de 1980, teniendo en cuenta que las normas que fundan tal erogación fueron declaradas nulas por el Consejo de Estado mediante sentencia del 12 de abril de 2018, proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, Consejero Ponente William Hernández Gómez, radicados acumulados 050012331000200500974 01 (1231-2014) - 050012331000200507606 02 (0091-2012), y por ende retiradas del ordenamiento jurídico, sin que se configure un derecho adquirido respecto a los pagos que no alcanzaron a entrar en el patrimonio de la demandante, aunado a que la Ordenanza 33 de 1980 fue suspendida provisionalmente por la misma Corporación mediante auto del 18 de julio de 2019, proferido por la Magistrada Susana Nelly Acosta Posada, dentro de la acción de nulidad que se sigue bajo el radicado 0500123310002019-00536.

2.5. PREMISAS NORMATIVAS

2.5.1. La prima de Vida Cara

Mediante la Ordenanza 034 del 23 de noviembre de 1973 la Asamblea Departamental de Antioquia, creó una “prima de vida cara” para los empleados públicos del Departamento de Antioquia

A su vez la Ordenanza 033 de 1974 la consagró para todos los servidores del departamento, incluidos los obreros o trabajadores oficiales así: “*se reconoce la prima*

de vida cara para los servidores departamentales, empleados, obreros, profesores y maestros, consistente en un setenta y cinco por ciento (75%), de su salario mensual, por una sola vez, durante el año de 1975 y de ciento por ciento (100%) a partir de 1976, cubierta en dos períodos por partes iguales; la primera durante el mes de febrero y la segunda mitad en el mes de agosto.”

Y mediante Ordenanza 31 de 1975 se elevó el monto de la prestación al 100% del salario mensual *“La prima de vida cara de que tratan las Ordenanzas 34 de 1973 y 033 de 1974 se pagará a todos los servidores del Departamento de Antioquia, con excepción de aquellos que desempeñen los cargos de gobernador, contralor General, etc., en cuantía del 100% del salario básico que será cubierta en dos cuotas iguales, así: el primer equivalente a la mitad de dicho salario, en el mes de febrero y la segunda, por igual valor, en el mes de agosto, de cada año.”*

Finalmente, la Ordenanza 33 de 1980, extendió la prima de vida cara a todos los pensionados del ente territorial *“La prima especial de vida cara se pagar también a quienes disfruten de pensiones de jubilación e invalidez y traspaso o sustituciones de pensiones cuando estas son cubiertas directamente a los beneficiarios por el Departamento de Antioquia”*

Valga resaltar que el compendio normativo anterior, se emitió por Asamblea Departamental en contravía con las normas constitucionales vigentes, esto es, los artículos 76, numeral 9, y 120, numeral 21, de la Constitución de 1886, con las modificaciones introducidas por el acto legislativo 01 de 1968, que radican la competencia para fijar factores prestacionales de los servidores públicos en el legislativo y la potestad reglamentaria en el Presidente de la República.

En esta misma dirección la Constitución Política de 1991, ratificó la potestad exclusiva del Congreso para la regulación de factores salariales y prestacionales de los servidores públicos, de conformidad con la previsión del numeral 19 literal e) del artículo 150.

En este contexto refulge palmario que los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales carecen de competencia constitucional y legal para establecer factores salariales y prestacionales de los empleados públicos y trabajadores

oficiales del orden territorial, pues dicha atribución, se itera, es exclusiva del Congreso de la República a través de una ley marco.

Con fundamento en el razonamiento anterior el Consejo de Estado, en sentencia proferida el 18 de abril de 2018 en los procesos acumulados 050012331000200500974 01 (1231-2014) 050012331000200507606 02 (0091-2012), dispuso *“Declárese la nulidad de las Ordenanzas 34 de 1973; 033 de 1974; 31 de 1975 y del artículo 1 de la Ordenanza 17 de 1981; todas ellas expedidas por la Asamblea Departamental de Antioquia y de los numerales 4 y 5 del artículo 1 del Decreto 001 Bis de 1981 proferido por el gobernador del Departamento de Antioquia.”*

Así las cosas, por efecto de la declaratoria de nulidad, las disposiciones que regulaban la prima de vida cara se excluyen del ordenamiento jurídico, recordando, en relación con los efectos de esa decisión, que el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, prescribe:

“Efectos de la sentencia. - La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes, pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios. (...)”

El Consejo de Estado, entre otras, en la sentencia del 27 de abril de 2017, expediente 11001032500020130108700 (2512-2013), sobre el particular, precisó:

“En un primer momento la Corporación sostuvo, a partir de la sentencia de 14 de junio de 1915, con ponencia del Consejero Adriano Muñoz, que para definir los efectos en el tiempo de las sentencias de nulidad, se debía aplicar el régimen de los actos jurídicos civiles contemplado en el Código Civil. Ello por cuanto para ese entonces, la jurisdicción contenciosa y la teoría del acto

administrativo aún no había alcanzado la autonomía y madurez que lograron consolidar posteriormente y en consecuencia, el acto administrativo era considerado y estudiado desde la (sic) órbitas del acto y del negocio jurídico civil. Entonces, de acuerdo con esta postura jurisprudencial, se tenía la nulidad como una sanción que afectaba el acto administrativo por haber trasgredido el ordenamiento jurídico y por tanto, debía restablecerse el entramado de las relaciones jurídicas al estado que tenían antes de su expedición, y sus efectos o consecuencias en el mundo jurídico se consideraban inválidos, es decir, que la sentencia de nulidad tenía alcances retroactivos, o sea, «ex tunc».⁴³

Dada la relevancia que cobra el referido latinazgo, precisa la Sala que significa «desde el origen» o «desde siempre»; entonces, la declaratoria de nulidad con efectos «ex tunc» es aquella que se retrotrae al día en que se concluyó un contrato, se dictó la resolución impugnada o, entró en vigor una norma de carácter general, como lo sería una ley o un acto administrativo.

Desde entonces y hasta la fecha, el mencionado criterio jurisprudencial se ha mantenido vigente, pero su sustento ha variado en el sentido de considerarse que su fuente de inspiración no se ubica en los postulados esenciales del derecho civil, sino que encuentra su razón de ser ante la necesidad de proteger principios generales del derecho adoptados por el constitucionalismo moderno, como el de conservación del ordenamiento jurídico, certeza del derecho y primacía de las normas de carácter superior.

Bajo esta óptica la jurisprudencia contenciosa ha afirmado, que como la declaración judicial de nulidad se funda en la existencia comprobada de vicios que afectan la validez del acto administrativo, los efectos de tal declaración deben ser «ex tunc», es decir, retroactivas, para deshacer las consecuencias derivadas de la aplicación de actos administrativos espurios.”

(...)

La postura jurisprudencial expuesta, aunque reiterada, no ha sido unívoca al interior del Consejo de Estado, pues, desde 1969, con algunas intermitencias, principalmente las Secciones Cuarta y Quinta de esta Corporación⁴⁴ se han apartado del mencionado criterio, con el objeto de modular, condicionar o asignarle efectos diferidos hacia el futuro o «ex nunc» a las sentencias de nulidad. Precisa la Sala, que el latinazgo «ex nunc», significa «en adelante» o «desde ahora»; por ejemplo, la rescisión de un contrato se efectúa a partir de que se pronuncia, la inexequibilidad de una ley o la nulidad de un acto administrativo, a partir de que se declara.

Los efectos hacia el futuro o «ex nunc» de la declaratoria judicial de nulidad de un acto administrativo, encuentran un sólido respaldo en la realización de valores y principios universales del derecho como los de la separación de poderes, la cosa juzgada, la seguridad jurídica, la buena fe, el respeto por las situaciones jurídicas consolidadas y la confianza legítima, ello en atención a que hasta el momento de declararse la nulidad, el acto administrativo anulado gozaba de presunción de legalidad y por lo tanto, es legítimo asumir que los ciudadanos orientaron su comportamiento confiados en su validez.

*Así mismo, al amparo de la hipótesis «ex nunc», es decir, la que estima hacia futuro el alcance de las sentencias de nulidad, la jurisprudencia de esta Corporación ha tenido en cuenta como sustento para decantarse por dicha postura, consideraciones relacionadas con **i)** las consecuencias que la decisión judicial pueda tener en los diferentes ámbitos de la vida nacional o local, como por ejemplo, la estabilidad institucional⁴⁵ y económica;⁴⁶ **ii)** la naturaleza y contenido del acto administrativo anulado; **iii)** la razón, vicio o causal por el cual fue anulado; **iv)** la existencia comprobada de situaciones jurídicas consolidadas,⁴⁷ etc.”*

Para la Sala, en este caso, la ausencia de competencia de la Asamblea Departamental que da lugar a la declaratoria de la nulidad de las Ordenanzas que regulan la prima de vida cara, denota que las ordenanzas fueron inconstitucionales desde su origen, en tanto desconocen la prohibición consagrada en el Acto Legislativo 01 de 1968 por lo que, en principio, no es posible derivar de ellas efectos válidos.

Cabe aclarar, que si bien, como lo itera el recurrente, las normas laborales son por definición retrospectivas, es decir regulan las situaciones futuras y las que encuentren en curso, no procede equiparar los efectos de la sentencia de nulidad del acto administrativo con la aplicación de la ley laboral en el tiempo, como lo pretende el alzadoista.

2.5.2. La sentencia de nulidad y los derechos adquiridos o situaciones consolidadas

Corolario de lo anterior, se tiene que las sentencias de nulidad de los actos administrativos de carácter general, son de efecto inmediato, vinculante y definitivo, y por regla general sus efectos son retroactivos, no obstante, no pueden afectar situaciones jurídicas consolidadas.

En este sentido el artículo 58 de la Carta Política de 1991, garantiza los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. La Corte Constitucional ha definido el derecho adquirido como *“aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una Ley y, que, por lo mismo, han instituido en favor de sus titulares un derecho subjetivo que debe ser respetado frente a Leyes posteriores que no puede afectar lo legítimamente obtenido al amparo de una Ley anterior. Presuponen la consolidación de una serie de condiciones contempladas en la Ley, que permiten a su titular exigir el derecho en cualquier momento.”* (sentencia C242 de 2009)

Importa puntualizar, que en relación con derechos pensionales la citada Corporación en la sentencia C-258 de 2013 sostuvo que es posible variar las condiciones o el monto en que se disfruta un derecho adquirido de tracto sucesivo como la pensión, siempre que este derecho no desaparezca o sea modificado de tal manera que el mismo se elimine:

“La Constitución también protege los derechos adquiridos de la retroactividad normativa, es decir, las situaciones ya formadas y no las condiciones de ejercicio del derecho, lo cual significa que quien esté disfrutando de un derecho cuyos efectos se consolidan de manera escalonada o en un tracto sucesivo -como por ejemplo la pensión, el salario, las prestaciones sociales, una deuda diferida en plazos, los cánones de arrendamiento, etc.-, tiene su derecho amparado por la Constitución, pero los efectos que aún no se han consolidado son modificables en virtud de finalidades constitucionales y con sujeción a los límites que la propia Carta impone. De allí que, según esta tesis, las pautas para ejercer el derecho adquirido pueden cambiar, siempre y cuando la existencia del derecho permanezca indemne. Por ejemplo, en virtud de este nuevo entendimiento el monto de las próximas mesadas pensionales puede variar siempre que no se supriman, puesto que, si se suprimen, ello implicaría que el derecho a la pensión ha sido revocado en desconocimiento de la protección de los derechos adquiridos. En este orden de ideas, en materia de derechos fundamentales, esta Corporación

ha afirmado sostenidamente que no tienen el carácter de absolutos y que pueden ser limitados en su ejercicio por disposiciones de carácter legal.”

2.6.- CASO CONCRETO

En el sublite está acreditado que el Departamento de Antioquia en cumplimiento de la sentencia de nulidad de los actos administrativos que crearon la prima de vida cara, suspendió el pago de la prestación a todos los servidores del ente territorial, tal como lo acepta en la respuesta al hecho séptimo de la demanda *“con fecha del 03 de marzo de 2018, se compartió oficio con radicado 2018020018783; en el cual se indicaba por parte del Gobernador de turno, algunas de las razones por la suspensión y no pago de la Prima de Vida Cara.”*

Pues bien, se aportó comunicación fechada en tal data, folios 20 anexo 01 Carpeta *Actuación Juzgado 11 Administrativo*, en la cual el entonces gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutierrez, informa las razones que llevan a la suspensión de este pago, y aunque tal escrito no está dirigido a la señora María Luz Atehortúa, se tiene como un hecho no controvertido que a partir de esa fecha se suspendió el pago de la mencionada prima.

En este contexto, pese a que la redacción de las pretensiones no es un modelo de claridad, para la Sala es diáfano que la pretensión de la demandante no es la inclusión de la prima de vida cara como factor salarial para reliquidar la pensión, como se lee en algunos apartes del libelo inicial, aspecto respecto al cual existe una situación consolidada que no ha sido modificada, como bien lo determinó la a quo, sino el restablecimiento del derecho que le fue suspendido y que corresponde al pago de una mesada adicional dividida en dos cuotas para los meses de febrero y agosto de cada anualidad por concepto de prima de vida cara, a partir del año 2018, hito temporal en que le fue suspendida, que corresponde, además, al derecho que fue reclamado en sede administrativa (folio 23 de la demanda glosada a la carpeta *Actuación Juzgado 11 Administrativo*)

Punto frente al cual debe exponerse, que también se exhibe acertada la decisión de la a quo, en tanto, pese a que el Consejo de Estado no declaró la nulidad de la Ordenanza 033 de 1980, que extendió el derecho a la referida prima para los pensionados del Departamento, la misma contiene un acto reglamentario o derivado de los actos administrativos que fueron declarados nulos. En adición a ello como lo argumentó el Departamento de Antioquia, la citada ordenanza fue objeto de suspensión provisional dentro del proceso de nulidad 18 de julio de 2019, proferido por la Magistrada Susana Nelly Acosta Posada, dentro del medio de control de nulidad de la Ordenanza 33 de 1980, radicado 0500123310002019-00536.

De tal manera que las pensiones de jubilación que se otorgaron por el Departamento de Antioquia teniendo en cuenta, para determinar su monto, la doceava parte de la prima de vida cara, como ocurrió en el caso de la promotora del proceso, a quien le fue incluida una doceava por este concepto en cuantía de \$53.630.17, (véase folio 19 *Actuación Juzgado 11 Administrativo*) no pueden ser modificadas por haber entrado a su patrimonio y por tal razón constituir un verdadero derecho adquirido.

Ahora tratándose del pago de la prima de vida cara, como prestación autónoma y de carácter periódico que se cancela a los pensionados como una mesada adicional dividida en dos cuotas los meses de febrero y agosto de cada anualidad, a la cual, se itera, a juicio de la Sala, se contraen las pretensiones, no es posible hablar de un derecho adquirido, respecto a los pagos que no se habían causado para fecha de la declaratoria de nulidad, que por ser pagos futuros no han entrado al patrimonio de la gestora del proceso, teniendo en cuenta que la norma que le dio origen es contraria al ordenamiento jurídico y no puede continuar produciendo efectos legales.

En este escenario no es posible mantener el reconocimiento a la demandante de la prima de vida cara como mesada adicional, dado que fue creada por las corporaciones territoriales, quienes carecían de competencia para regular factores salariales o prestacionales, relevando la Sala que en los términos de la sentencia

C258 de 2013, el retiro de la prestación no afecta el derecho pensional reconocido, en tanto lo que se suprime es una prerrogativa adicional que le fue otorgada con fundamento en una norma expedida en contravía de la Constitución, sin que se afecte el derecho pensional mismo.

Prima de vida cara como derecho convencional

Finalmente, anota este juez plural que no se acreditó el carácter convencional de la prestación, relevando que ello no fue planteado en los hechos del escrito inaugural y aunque se aportó el documento rotulado como Convención 1983-1984, (folios 28 A 40 demanda) no se anexó el sello de depósito ante el Ministerio de Trabajo, no se acreditó que la misma no fue modificada en negociaciones posteriores ni que la demandante es beneficiaria de la convención, pues nada se dice al respecto.

Aunado a que en la pretensión segunda el apoderado de la demandante solicita se reestablezca el derecho establecido en la convención colectiva del 25 de noviembre de 1965, petición que reitera en la apelación, no obstante, dicha convención no fue aportada al proceso.

Colofón de lo anterior, no tiene vocación de prosperidad el recurso de alzada.

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante, inclúyase como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

3. DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:


1.- Se **CONFIRMA** la sentencia objeto de apelación, proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, en audiencia celebrada el día 29 de noviembre de 2022, en el proceso ordinario instaurado instaurado por la señora **MARÍA LUZ ATEHORTUA CORREA** en contra de **LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA**.


2.- **COSTAS** en esta instancia. a cargo de la parte demandante, inclúyase como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.


3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones, cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO